

Santiago, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

VISTO:

En estos autos RIT N° O-5508-2018, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, caratulados “Figuerola con Fisco de Chile”, por sentencia de cuatro de abril del año en curso, se rechazó las excepciones de incompetencia y prescripción opuestas por la demandada y se acogió parcialmente la demanda, declarando que entre las partes existió un vínculo de subordinación y dependencia desde el 1 de junio de 2014 al 29 de mayo de 2018; que el despido fue injustificado, con la subsecuente condena al pago de las indemnizaciones pertinentes más recargo, cotizaciones de seguridad social, intereses, reajustes, sin costas de la causa.

En contra de este fallo la demandada dedujo recurso de nulidad, invocando subsidiariamente las causales de letras a), b) y c) del artículo 478 del Código del Trabajo y por último, también de manera subsidiaria, el artículo 477 de esa codificación, por infracción de la normativa que singulariza.

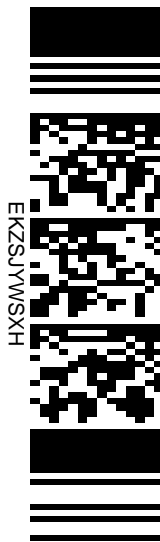
Declarado admisible el arbitrio, se escuchó a los abogados que, en su oportunidad, concurrieron a la vista de la causa.

CONSIDERANDO:

I.- Causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo:

1°.- Que la fundamenta el Fisco, en resumen, señalando que el tribunal carecía de competencia para conocer de estos autos, atendido que no existe relación laboral entre las partes, pues no concurren los institutos de empleador y trabajador, propios del contrato de trabajo, por lo que la controversia no se encuentra entre las materias que artículo 420 letra a) del código laboral entrega en conocimiento a los Juzgados del Trabajo, considerando que la contratación del demandante se ciñó a las prescripciones de la Ley de Bases de la Administración del Estado, en su artículo 15 y los artículos 1° y 11 del Estatuto Administrativo.

2°.- Que para resolver la incompetencia alegada, cabe tener presente que en la especie se presentó demanda de nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, por lo que resulta evidente



que las acciones reseñadas y que dieron motivo a la formación de estos antecedentes se insertan dentro de la atribución de competencia que conforme al artículo 420 letra a) del Código Laboral corresponde conocer a los Juzgado del Trabajo, siendo una cuestión completamente distinta el éxito de la misma, que en definitiva, dependerá de los hechos asentados en juicio.

La circunstancia de haber basado el demandado su defensa en que la naturaleza del vínculo corresponde a un contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios y no a una relación laboral en tanto entiende que el estatuto especial corresponde al respectivo contrato civil, no priva a la jurisdicción laboral del imperio a que la obliga el artículo 7° de la Constitución Política de la República, pues requerida como ha sido, a ella le incumbe decidir, en sentencia de fondo, ante qué tipo de relación de trabajo se encuentran las partes y si han de aplicarse supletoriamente las normas del Código del ramo, considerando, especialmente, que sostener que el tribunal carece de competencia para dilucidar la existencia de una relación laboral habida entre las partes y las consecuencias que de ella derivan, pugna con lo previsto en la letra a) del citado artículo 420.

Lo dicho basta para desestimar este primer acápite del recurso.

II.- Causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo en relación a los artículos 11 de la Ley 18.834 y 7° del primer cuerpo de leyes citado:

3°.- Que señala el demandado que el fallo infringe la lógica jurídica como regla de la sana crítica y, específicamente, el principio de la razón suficiente, al incurrir en una consideración parcial e incompleta de las pruebas incorporadas al juicio, tal como se desprende del motivo 13°, señalando que el estándar legal para arribar a las conclusiones ahí expresadas no se encuentra satisfecho en la sentencia recurrida. En efecto, pone de relieve que la magistrada reconoció la existencia de un vínculo jurídico contractual bajo la forma de contrato por honorarios a suma alzada con la Subsecretaría por cuatro años, sin disconformidad al respecto, celebrados de manera voluntaria y que los servicios pactados se ajustaron a cumplimiento de jornada y sujetos a elementos clásicos de subordinación prescritos y regulados en los sucesivos convenios a honorarios a suma



alzada, desconociendo que los llamados “indicios de laboralidad” deben entenderse dentro del marco regulatorio que rige a las partes, como es el contrato de honorarios pactado con la actora, lo que por lo demás, siempre se establece en beneficio de las partes, pero que en ningún caso puede significar la mutación de un contrato de honorarios a uno de carácter laboral. Asimismo, no se discutió que la demandante era de profesión educadora de párvulos y que desarrollaba funciones en calidad de experta en el gabinete de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, de lo que se deriva que fue contratada a honorarios por diversos periodos de tiempo y para desempeñar las mismas funciones, sin perjuicio de la amplitud de las mismas y, que por ende, son de carácter permanentes; desconociendo en primer lugar, que siempre los cometidos indicados en los contratos a suma alzada deben tener alguna relación con los fines propios del órgano contratante más aun cuando estos se prestan en el contexto y programa en calidad de experto en el gabinete de una Secretaría Regional Ministerial. Asimismo, desconoce el fallo que la contratación de la contraria obedece a que la autoridad ministerial carece de facultades para contratar trabajadores conforme a las normas del Código del Trabajo por lo que, de haberlo hecho, el contrato habría sido nulo por infracción al principio de Legalidad.

De lo expuesto, no se visualiza en ninguno de los considerandos del fallo base las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, como indica la disposición, que conduzcan paulatinamente a la conclusión que llevó al sentenciador a arribar lo que concluyó, por infracción manifiesta del principio de “razón suficiente”.

4º.- Que cabe subrayar, como reiteradamente ha sostenido esta Corte, que la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo concierne a la revisión de las razones que sustentan la motivación probatoria y la consecuente fijación de los hechos que se han tenido por demostrados, cuando en esa actividad se cometen yerros que importan contrariar los parámetros de la lógica, de la técnica, de los conocimientos científicos o de las reglas de experiencia. Es decir, de lo que se trata es de fiscalizar que las denominadas razones probatorias explicitadas por el sentenciador respeten esos lineamientos o directrices.



5°.- Que de lo señalado precedentemente se sigue entonces que la labor del recurrente consiste en precisar las razones que reprueba y, enseguida, demostrar cómo y por qué las mismas contrarían esos lineamientos. Sin embargo, ninguna de tales exigencias cumple el arbitrio que se revisa. En efecto, lo que se plantea en términos genéricos es que la prueba producida en el juicio resultaba suficiente para acreditar que la prestación de servicios del actor no se adecua a la definida en el artículo 7° del Código del Trabajo, sino que se encuentra en el artículo 11 de la Ley 18.834. Pero dicha tesitura se hace descansar en una discrepancia del examen practicado por la sentenciadora a las evidencias probatorias y sus conclusiones, olvidando que tal disconformidad en caso alguno puede configurar una infracción a la sana crítica como método de apreciación de la prueba. Aseverar que se probó un hecho u otro involucra una invitación para que esta Corte practique una valoración directa de la prueba, distinta de la realizada por la del juez del juicio, como si la función del tribunal de nulidad fuera actuar como uno de segunda instancia, cometido que, como se sabe, no le corresponde.

En lo concerniente a la alegación genérica de conculcación de la regla de la lógica de la razón suficiente, la simple lectura del recurso deja en evidencia que tal argumento no pasa de ser una disconformidad con el razonamiento del fallo, dirigida exclusivamente a encaminar el resultado del proceso a una postura acorde a los intereses que representa, lo que no conlleva desde luego una infracción a las reglas de la lógica a través del aludido principio, considerando además, que en último término se atacan conceptos jurídicos que deben llenarse fácticamente por el juzgador, operación que escapa del mero examen de la prueba.

A mayor abundamiento, la no consideración, ponderación o falta de examen de un medio de prueba determinado –con la consignación de su influencia en lo dispositivo de la decisión– es materia de otro motivo de anulación.

III.- Causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo:



6°.- Que este tercer motivo de anulación, lo sustenta la demandada en la errada calificación de la relación existente entre las partes, pues los asentados en juicio permiten concluir que las partes se vincularon mediante un contrato a honorarios en virtud del principio de autonomía de la voluntad de los contratantes.

Refiere que ninguno de los supuestos “indicios de laborabilidad” señalados por la sentenciadora no hace aplicable a este proceso el artículo 7° del Código del Trabajo ni otras normas de dicho cuerpo legal, por cuanto dichas condiciones pueden perfectamente pactarse en un contrato de prestación de servicios como los de autos. El hecho que la actora realizara las labores “en calidad de experta o agente pública”, no genera una relación de carácter laboral, tanto porque estas condiciones pudieron caracterizar la prestación de servicios de acuerdo con el convenio a honorarios, cuanto porque el Código del Trabajo no rige para la Administración del Estado. El estatuto al que se encontraba sometida la demandante, refiere una serie de condiciones propias de los convenios a honorarios dentro del sector público pero que no implican de forma alguna relación laboral regida por el Código del Trabajo y ello porque todas las personas contratadas a honorarios se rigen por el estatuto jurídico de su convenio y en subsidio por el Derecho común, lo que ha sido reconocido tanto por la Contraloría General de la República como por los Tribunales de Justicia.

En consecuencia, la naturaleza jurídica de la relación contractual corresponde a la de un acuerdo civil de prestación de servicios sancionada por actos administrativos que tienen plena validez, y sobre la base de los antecedentes que fueron aportados por las partes así debió concluirlo el tribunal, considerando que los servicios de la actora fueron contratados para cumplir funciones en el gabinete de la Seremi de la época en calidad de “agente público o experto”, tratándose de labores permanentes y continuas del servicio.

7°.- Que a los efectos de asentar la recta exégesis en el negocio, es menester traer a colación el artículo 1° del Código del Trabajo, que señala que “Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.”



“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.”

“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.”

“Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

Por su lado, el artículo 11 de la Ley N° 18.834, prevé que “Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera”.

“Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.”

“Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

8°.- Que acorde con la normativa transcrita, la premisa base está constituida por la aplicación del Código del Trabajo a todas las vinculaciones de orden laboral habidas entre empleadores y trabajadores, entendiendo por laboral, en general, a aquellas que reúnan las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código citado, es decir, aquella relación en la que concurren la prestación de servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación y el pago de una remuneración por dicha prestación, siendo la existencia de la subordinación



y dependencia el elemento esencial y mayormente determinante y caracterizador de una relación de este tipo.

9º.- Que el artículo 1º del Código del Trabajo consigna, además de la referida premisa general, una excepción y una contraexcepción. En efecto, la excepción a la aplicación del Código del Trabajo la constituyen los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, pero esta situación excepcional tiene cabida únicamente en el evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Por su parte, la contraexcepción se formula abarcando a todos los trabajadores de las entidades señaladas, para los cuales se vuelve a la regencia y al imperio de las normas contenidas en el Código del Trabajo, solo en aquellos aspectos o materias no regulados especialmente en sus respectivos estatutos, siempre que estas disposiciones no fueren contrarias a estos últimos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado que no se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial y, aun contando con dicho estatuto, si éste no regula el aspecto o materia de que se trate; en este último caso, en el evento que no se oponga a su marco jurídico.

10º.- Que, por otra parte, es importante tener en consideración que el contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

11º.- Que los trabajos que se efectúan conforme a esta última calidad jurídica, constituye una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla el carácter de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquellas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales,



accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquellas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.

12°.- Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la Administración del Estado bajo la modalidad contemplada en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

13°.- Que en consecuencia, la resolución del caso propuesto por el recurrente supone dilucidar previamente si la contratación a honorarios se enmarca en las prescripciones del citado artículo 11°, ya que si ello no fuera así, tiene cabida en aquellas del Código del Trabajo.

En este examen debe tenerse presente la circunstancia de que la sola consideración de “indicios de laboralidad”, desconectados de su contexto y del marco normativo que autoriza este tipo de contrataciones (a honorarios), puede conducir a equívocos. En efecto, la existencia de algún tipo de horario, la necesidad de rendir cuenta de las labores ejecutadas o el hecho de recibir instrucciones, no es de suyo un camino necesariamente seguro,



porque responden a exigencias que resultan inherentes cuando se trata de velar por el recto uso y destino de los recursos públicos, como es deber de todo órgano o autoridad que los administra.

14º.- Que, en consecuencia, para resolver la litis se debe establecer si la demandante en el ejercicio de las funciones que le fueron cometidas desplegó un quehacer específico y acotado en el tiempo -como lo ordena el citado artículo 11 de la Ley N° 18.834-, o si, por el contrario, desarrolló una labor permanente bajo las condiciones de subordinación y dependencia de su empleador. En tal virtud, la sentenciadora estableció que:

a) Con fecha 11 de septiembre de 2014 se contrató a la demandante desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2014, en calidad de experta para desempeñar las siguientes labores: apoyar técnicamente al Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones en materias de políticas de transporte, asesorándolo en la ejecución de estas con otras entidades; prestar apoyo al Seremi en la evaluación y resolución de conflictos especialmente con los operadores de transporte público de pasajeros; gestionar instancias de trabajo y vínculos territoriales con actores municipales e Intendencia Metropolitana en materias de transporte urbano y uso de la red vial; colaborar en las coordinaciones sectoriales y regionales que el Seremi determine; ayudar a gestionar la relación y comunicación con los actores gremiales del sistema de transporte de la Región Metropolitana, así como, con las autoridades públicas y privadas, regionales o comunales, de acuerdo a las instrucciones que el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana disponga; establecer y liderar estrategias o cursos de acción asociados al desarrollo comunicacional de las políticas ministeriales y regionales; coordinar y potenciar las factibilidades que competan al uso de la red vial de transporte urbano; apoyar en labores asociadas a temas estratégicos del ministerio, vinculados a pro movilidad, congestión y otros definidos por la autoridad.

Se estableció que la experta debía entregar un informe de las labores encomendadas, previamente visado por el supervisor del contrato. Dicho informe deberá presentarse en el departamento de desarrollo de personas, la primera quincena de los meses de septiembre y diciembre de 2014.



Asimismo, en la cláusula cuarta se estipuló una jornada laboral de 44 horas semanales, de lunes a viernes, registrando para tal efecto la hora de ingreso y salida en el sistema de control horario dispuesto para estos fines. De no cumplirse con la cantidad de horas establecidas, la Subsecretaría procedería a descontar el monto del honorario bruto mensual que corresponda, siempre que esta cantidad sea superior a una hora de tiempo no trabajado.

A su turno se le otorga el derecho de hacer uso de días de feriado legal, así como también hasta 3,5 días hábiles en el año de permisos con goce de remuneración; una hora al día para dar alimento a sus hijos menores de dos años; capacitación; permiso pre y post natal, entre otros;

b) El segundo contrato se celebró el 22 de enero de 2015, para regir desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. La demandante se obligó a desarrollar las siguientes labores: coordinar equipos y generar cursos de acción que permitan evaluar y dar curso en caso que corresponda a las solicitudes de factibilidad de uso de vía pública para eventos y/o actividades deportivas; coordinar actividades que permitan la difusión y gestión de la política pública de uso de la red vial básica establecida en el Decreto N°75 de 1982, en conexión con las autoridades de la región, facilitando diálogos, asambleas, cabildos u otros dispositivos de participación pública; facilitar la vinculación de las redes de tránsito municipales, coordinando reuniones u otras actividades; reportar las actividades alertando a la autoridad sobre las contingencias o cualquier evento que pueda afectar la adecuada implementación de la política pública en materia de transporte.

Asimismo, la demandante debía entregar un informe de las labores encomendadas, en términos similares a los consignados en la convención anterior;

c) Mediante Decreto N° 177 de abril de 2015 se modificaron las labores acordadas por las siguientes: apoyar técnicamente al Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones en materias de políticas de transportes, asesorándolo en la ejecución de éstas con otras entidades; prestar apoyo al supervisor del presente contrato en la evolución y resolución de contingencias en materias de transporte y



telecomunicaciones, especialmente facilitando la gestión y resolución con actores claves vinculados al transporte público de pasajeros; atender y canalizar las buenas prácticas y el control de gestión al interior de la Seremi RM; ponderar y atender los requerimientos de la ciudadanía y actores claves del sector que reciba el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, según las necesidades de los diferentes actores; colaborar en las coordinaciones sectoriales y regionales que el Seremi determine; colaborar en la gestión de la relación y comunicación con los actores gremiales del sistema de Transporte de la Región Metropolitana, así como con las autoridades públicas y entidades privadas, tanto regionales o comunales, de acuerdo a las instrucciones que el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana disponga; prestar apoyo en la coordinación de proyectos y/o curso de acciones propias de la política pública del sector en la Región, asistiendo al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, cuando este lo instruya;

d) El tercer contrato se acordó con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en virtud del cual se contrata a la actora como “experta” y se le encomiendan labores similares a las acordadas en la convención anterior. Asimismo, se obligó a entregar un informe de previamente visado, estableciéndose además, una jornada laboral de 44 horas semanales, y los derechos a que se hizo referencia;

e) Mediante un nuevo contrato, la actora se obligó a prestar servicios desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para lo siguiente: gestionar y facilitar el dialogo entre el Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana y los actores gremiales del sistema de transporte de la región, así como también, con las autoridades públicas, entidades privadas, sean estas regionales o comunales; supervisar la planificación y efectuar el control de gestión al Interior de esta Secretaría Regional Ministerial; supervisar a la Unidad de Recursos Humanos de esta Secretaría Regional Ministerial, colaborando asimismo con la gestión del rendimiento organizacional; supervisar la correcta administración de la bodega y efectuar el control de inventario de esta Secretaría Regional Ministerial; prestar apoyo en la



gestión de acciones sectoriales y regionales según los requerimientos del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones; supervisar y gestionar proyectos y acciones inherentes de la política pública del sector en la Región, asistiendo al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones; colaborar en la coordinación y control del trabajo respecto a las distintas unidades que componen esta Secretaría Regional Ministerial; encargada de actualizar la Plataforma de la Ley 20.730 de Lobby, en esta Secretaría Regional Ministerial, gestionando las audiencias con la autoridad y retroalimentando esta plataforma en los plazos establecidos por la Ley, en lo concerniente a la publicación de las audiencias, viajes realizados y regalos recibidos por el sujeto pasivo.

Se reitera la jornada laboral y los derechos ya reconocidos;

f) a continuación se contrató a honorarios a la actora por el período que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, para desempeñar labores similares a las estatuidas en la convención que precede;

g) Con fecha 28 de diciembre de 2017 se celebró un nuevo contrato, con vigencia entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. El objeto del mismo prestar apoyo al Secretario Regional Ministerial en los requerimientos que involucren la comunicación y reunión con los distintos actores relevantes del área del transporte y las políticas públicas ya sean públicos como privados, tales como federaciones del gremio, municipios, otras entidades gubernamentales, consejeros/as regionales, diputados/as y senadores: prestar apoyo al Secretario Regional Ministerial en el seguimiento de los procesos y gestiones del área de Gestión y Procesos, Área de Operaciones, Área legal, Gabinete y las gestiones que digan relación con recepcionar, recibir, informar y/o resolver o gestionar las consultas y requerimientos de usuarios que se realicen de manera presencial como por otra vía en oficinas de la Secretaría dispuestas para ello; colaborar con el Supervisor del presente contrato en la planificación y el control de gestión al interior de la Secretaría Regional Ministerial de la región Metropolitana, respecto de los indicadores C.D.C. y procesos que puedan presentarse en el año 2018 tales como; licitación de transporte, perímetro de exclusión, concursos, entre otros; apoyar para mejorar la supervisión de la encargada



de personas, respecto al avance de los procesos que involucren temas de Recursos Humanos para el año 2018, tales como procesos de ingreso, etapas de evaluación, procesos de desvinculación, renovación de contratos, iniciativas provenientes del nivel central que involucren al personal de la Secretaría Ministerial; apoyar en la supervisión del desempeño del equipo que gestiona de mantenimiento del Edificio Gloria para el año 2018, de manera de efectuar mejoras en el desempeño optimizando los recursos; apoyo en la coordinación de las gestiones en que se involucre el nivel central que digan relación con materias de personal y gestión interna, tales como proyectos de mejoramiento y mantención del edificio, así como cuestiones relativas al perfeccionamiento y ce y servidores y funcionarios para el año 2018; colaborar en la asesoría al Secretario Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región Metropolitana en los proyectos y acciones inherentes de la política pública del sector en la Región según los requerimientos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o del Gobierno Regional para el 2018; prestar apoyo al Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones en la gestión de acciones intersectoriales y regionales, tales como mesas intersectoriales de Intendencia de trabajo en temas locales, que se trabajen durante el 2018, según lo requiera el Ministerio o el Gobierno Regional;

h) La demandante prestó servicios continuos desde el 1 de junio de 2014, hizo uso de permisos con goce de remuneraciones, de licencia médica, entre otros derechos.

Asimismo, registraba su asistencia, horario de ingreso y salida en forma diaria;

i) Mediante Decreto Exento RA N° 288/535/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, la demandada puso término al último contrato de honorarios que la unía con la actora;

j) La demandada no enteró las cotizaciones de seguridad social de la demandante.

15°.- Que contrastado lo manifestado, con los hechos establecidos en el fallo, es claro que los servicios prestados por la actora, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan



cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral entre las partes, atendido el desarrollo práctico que en la faz de la realidad concreta tuvo dicha relación, surgiendo indicios que demuestran, en los términos descritos en el artículos 7° del Código del Trabajo, una relación sometida a su regulación, que configuran una evidente prestación de servicios personales, sujeta a dependencia y subordinación y por la cual la demandante recibía en cambio una remuneración.

Tal conclusión adopta mayor vigor si se considera que se trata del desempeño de servicios que se prolongaron en el tiempo sin solución de continuidad, lo que impide estimar que se desarrollaron conforme las exigencias de la modalidad contemplada en el artículo 11° de la Ley 18.834. En efecto, el desempeño durante cuatro años, y en las condiciones señaladas en el razonamiento que antecede, no puede considerarse que participa de la característica de especificidad que contempla dicha norma, o que se desarrolló en la condición de temporalidad que indica, por lo que corresponde aplicar el Código del Trabajo, de manera que solo cabía concluir que el vínculo existente entre las partes es de orden laboral, continuamente por el lapso señalado, ejecutando actividades similares, no circunscritas ni a un plazo o condición determinada, tal como ocurre con las asesorías propias de los asuntos que la repartición está llamada a revolver, abocándose a labores necesarias para el ejercicio de la función de la Subsecretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, en la gama de las tareas que le cabe asumir, propias del servicio, lo que demuestra la inmanencia de las mismas.

16°.- Que en consecuencia, no resulta ser efectivo el postulado del recurrente en cuanto plantea que los hechos materia del juicio encuadran en una relación estatutaria regida por el inciso final del artículo 11 del Estatuto Administrativo, puesto que tal como se ha razonado por el juez del grado, la calificación de la relación que unió a las partes de este proceso encuadra en aquella regida por el Código del Trabajo, de manera que esta Corte debe atender a los hechos que han quedado asentados en el fallo, que son los que deben ser calificados jurídicamente, por constituir hechos de la causa, inamovibles para el tribunal de anulación, por lo que no puede



obviarse que los servicios prestados por la demandante lo fueron en procesos habituales y continuos, lo cual por cierto excluye las funciones o tareas accidentales y, además, los cometidos específicos, que determinarían la existencia, como se postula por el impugnante, de una relación civil regida por normas de esa naturaleza, y que quedaría bajo la tutela de tribunales del mismo orden.

17°.- Que, por último respecto de esta tercera causal de invalidación, se evidencia que por su intermedio el recurrente pretende que se concluya la cuestión definitiva, que depende de otras circunstancias, como lo es precisamente la cuestión de fondo, esto es, que la errónea calificación es la que se hizo de la relación como laboral, postulando que sería civil, lo que evidencia que este acápite del arbitrio aparece erróneamente cursado, ya que por su intermedio el recurrente cree que puede presentar lisa y llanamente el fondo del problema como el yerro en la calificación a que alude la letra c) del citado artículo 478, cuando esta circunstancia es nada menos que el foco de toda la discusión.

IV.- Causal del artículo 477 del Código del Trabajo en relación a los artículos 1, 11 y 96 de la Ley 18.834; 2 y 15 de la Ley 18.575; 6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República; 2° de la Ley 19.880; 58 del Código del Trabajo, 4 inciso 2° y 9 inciso 3° del D.L. N° 1.263:

18°.- Que en resumen y reiterando los argumentos esgrimidos, se señala que las relaciones entre el demandante y el servicio estaban sometidas a normas de orden estatutario y, precisamente, en este contexto dicho servicio se ciñó a la normativa del artículo 11 de la Ley 18.834 para contratar las labores de la demandante, dado que ese estatuto le faculta expresamente para la contratación de personal bajo honorarios y no de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, el que resulta inaplicable para decidir la controversia de autos. De este modo las labores se ejecutaron merced de una modalidad prevista por la ley, circunstancia que ha sido desconocida por el juez a quo, como también se ha desestimado absolutamente una circunstancia acreditada en el juicio y que corresponde



al hecho que la contratación se efectuó en el marco de una necesidad de asesoría profesional.

Advierte que al Fisco le resultaba imposible descontar cualquier suma de dinero desde los honorarios pagados a la contraria, en observancia a lo dispuesto en el artículo 96 del Estatuto Administrativo, por carecer de autorización. Por lo expuesto, se olvida que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia. Luego, es inconcuso que carecen de potestad, o sea, de habilitación legal previa y expresa para celebrar contratos de trabajo, por lo que la sentencia yerra al razonar que existió una especie de relación laboral velada con un vínculo a honorarios.

Refiere que no puede estimarse aplicable el Código del Trabajo al caso de autos habida cuenta su referencia supletoria a los funcionarios de la Administración y no a las personas contratadas a honorarios.

Explica que en razón al principio de legalidad es imposible contratar bajo la normativa contemplada en el código laboral y del mismo modo, este principio impide el pago de prestaciones que no se encuentren autorizadas por ley. Por lo tanto, atendida la naturaleza civil de aquellos contratos, la demandada carecía de título para hacer pago de cotizaciones de seguridad social de la actora.

Afirma que atendido el carácter constitutivo de la sentencia de autos solo existiría la obligación del pago de cotizaciones de seguridad social y de salud desde la fecha en que ésta se encuentre ejecutoriada. Sostener lo contrario, dice, importa no solo contravención de ley, sino que además una sanción desproporcionada para el Fisco, atendida la elevada cuantía que importan los reajustes, intereses y multas establecidas en la Ley 17.322.

19°.- Que, el fundamento del reproche de ilegalidad que se examina basado en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, radica por una parte, en que en el fallo de base se le habría desconocido al demandado la prescripción del artículo 11 del Estatuto Administrativo, en tanto quienes han sido contratados en la forma allí prevista –cuyo sería el caso del demandante- se rigen por las disposiciones de la propia convención.



Asimismo, la infracción del artículo 1° del Código del Trabajo, se apoya en la transgresión de la excepción que se contiene en dicha norma, en orden a que se excluye de su aplicación a los funcionarios de la Administración del Estado que se rijan por un estatuto especial, como lo serían los sucesivos contratos a honorarios celebrados con el demandante por el Servicio demandado.

20°.- Que huelga aquí reiterar los postulados generales asentados respecto de esta causal a propósito del arbitrio del actor, y que permite concluir que del tenor del recurso del demandado, se evidencia que no se ha ajustado a los lineamientos propuestos, pues en la sentencia quedó definido que los servicios contratados no están comprendidos en la figura de “cometido específico” que contempla el legislador y que autoriza la contratación a honorarios, como asimismo se demostró la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia. De modo entonces que los planteamientos del recurrente desconocen y contrarían lo establecido en el fallo, que no solo dan cuenta de la existencia del vínculo de trabajo y consecuentemente de la obligación –inherente al empleador- de pago de las cotizaciones de seguridad social así como de la ocurrencia del despido a que hubo lugar.

21°.- Que, por consiguiente, sobre la base de los hechos fijados en el fallo impugnado, sin perjuicio de la alegación del demandado en orden a que se contrató al actor a honorarios, la calificación jurídica realizada por el juez a quo acerca de la naturaleza de la vinculación habida entre las partes, enmarcándola en las disposiciones del Código del Trabajo, se aviene con la legalidad vigente, sin que se haya desconocido facultad alguna de las conferidas al Servicio y sin que se advierta transgresión a los artículos en que se apoya la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo.

22°.- Que como corolario de lo que se viene razonando solo resta concluir que el recurso de nulidad debe desestimarse en todos sus extremos.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada contra la sentencia de cuatro de abril del año en curso, recaída en la causa RIT O-5508-2018 caratulada

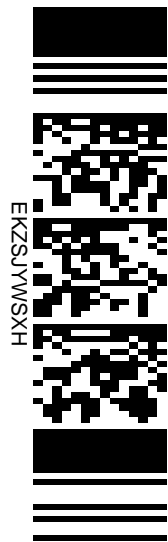


“Figueroa con Fisco de Chile”, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol N° 1154-2019



Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P., Marisol Andrea Rojas M., Lilian A. Leyton V. Santiago, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

